Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna

Artículo 1º

Esta Ley tiene por objeto establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el 1º de enero de 1994 en el estado de Chiapas.

Para los efectos de la presente Ley, se entenderá como EZLN el grupo de personas que se identifica como una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó, por diversas causas y se involucró en el conflicto a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 2º

Será objeto del acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere el artículo anterior, entre otros, pactar las bases que permitan:

I.- Asegurar la paz justa, digna y duradera en el Estado de Chiapas, dentro del pleno respeto al Estado de Derecho;

II.- Atender las causas que originaron al conflicto y promover soluciones consensadas a diversas demandas de carácter político, social, cultural y económico, dentro del Estado de Derecho y a través de las vías institucionales;

III.- Propiciar que los integrantes del EZLN participen en el ejercicio de la política dentro de los causes pacíficos que ofrece el Estado de Derecho con respeto absoluto a su dignidad y garantías de ciudadanos mexicanos;

IV.- Conciliar las demandas e intereses legítimos de los diversos sectores de la sociedad chiapaneca.

V.- Promover el bienestar social y el desarrollo económico sustentable en Chiapas; y,

VI.- Proponer los lineamientos para la amnistía que, como consecuencia del proceso de diálogo y conciliación, concederá en su caso el Congreso de la Unión por los hechos relacionados con el conflicto en el Estado de Chiapas, iniciado a partir del 1º de enero de 1994.

Artículo 4º

Con objeto de propiciar condiciones para el diálogo y la conciliación, [...] las autoridades judiciales competentes mantendrán suspendidos los procedimientos iniciados en contra de los integrantes del EZLN que se encuentran sustraídos de la acción de la justicia, y ordenará que se aplace por dicho término el cumplimiento de las órdenes de aprehensión dictadas dentro de dichos procedimientos. [...] se mantendrán las suspensiones mencionadas en el párrafo anterior, siempre que continúen las negociaciones para la suscripción del acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere esta Ley.

Artículo 6º

En tanto se desarrolla el diálogo y la negociación, el Gobierno Federal adoptará las medidas necesarias para garantizar el libre tránsito de los dirigentes y negociadores del EZLN y asegurar que no serán molestados, en sus personas o posesiones, por autoridad federal alguna.

VIENE DE LA PÁGINA 1

paz. Un camino que transitaba por el reconocimiento de las legítimas demandas sociales y que había logrado llevar a la mesa de diálogo al Ejército (hay que subrayar la palabra Ejército) Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). A pesar de que este diálogo no ha tenido resultados prácticos la vía de la negociación estaba, por lo menos, señalada.

El objetivo declarado del diálogo es convertir al EZLN en una fuerza política que actúe en el marco legal mexicano. Sin embargo, la cúpula política (con divisiones cada vez más evidentes y profundas), parece perder confianza en el diálogo precisamente en la medida que registra avances políticos del

zapatismo. A casi dos años de firmados los Acuerdos de San Andrés es mayor la dificultad de seguir negando el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ni las supuestas "fallas técnicas" de la iniciativa de la llamada Ley Cocopa, ni el peligro de la balcanización parecen sostenerse frente a la sólida argumentación civil acerca de la necesidad de reconocer lo que se ha reconocido internacionalmente como derecho de todo pueblo: la libre determinación y la autonomía.

En segundo lugar, el "cerco social" con el que se planteó limitar al EZLN parece haber fracasado. La marcha de los 1,111 zapatistas a la ciudad de México demostró que existe una amplia

VIENE DE LA PÁGINA 12

■ Vigencia del marco jurídico de la negociación

Es necesario el respeto pleno a la vigencia de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas y a los principios y procedimientos acordados por las partes.

■ Situación militar

Urge reducir la presencia y movilización militar en las zonas de los Altos, Norte, Cañadas y Selva de Chiapas, de manera que se genere un clima de distensión que propicie las condiciones para la reanudación del diálogo. La ubicación de las tropas del Ejército Mexicano dentro de las comunidades indígenas, así como el establecimiento de retenes militares o de cualquier otro grupo, no contribuye a generar estas condiciones.

■ En relación con las armas

Deben desarmarse los grupos paramilitares que actúan en las diferentes zonas del Estado de Chiapas y fincarles las responsabilidades que tengan en la comisión de delitos.

En el caso del EZLN, el destino de las armas debe ser materia de la agenda de negociación y consecuencia del acuerdo mutuo entre las partes con base en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

■ Investigación de Acteal

Es necesario que la Procuraduría General de la República acelere las investigaciones y el financiamiento de responsabilidades a los autores materiales e intelectuales de la matanza de Acteal. Es urgente que se concluyan las líneas de investigación y las posibles implicaciones de servidores públicos en dicho ilícito.

■ Atención a los desplazados

En el marco de la generación de condiciones políticas y sociales para el retorno de los desplazados a sus comunidades, la ayuda humanitaria que se requiera debe otorgarse sin distinción de filiación política o credo religioso. La Comisión Nacio-

nal de Derechos Humanos deberá actuar como garante de la atención social que se requiera y, en el caso de los desplazados que no acepten la asistencia de instituciones gubernamentales, será la propia CNDH la que propicie el auxilio de organismos de la sociedad civil.

■ Indemnizaciones

En relación con los deudos de todas las víctimas del conflicto, proponemos que la propia CNDH vele por las gestiones y mecanismos adecuados para su oportuna y justa indemnización.

■ Presuntos zapatistas presos

La Cocopa y la Conai presentarán a las autoridades competentes los casos pendientes de liberación conforme a derecho de los presuntos zapatistas presos.

■ Mecanismos de conciliación regional

La conciliación es un tema que las partes han acordado tratar dentro de la agenda del diálogo, pero la gravedad del momento y la multiplicación de conflictos hace necesario que los actores de San Andrés generen mecanismos de conciliación en las regiones de Chiapas que así lo requieran.

■ Comisión de Seguimiento y Verificación

Es urgente reactivar los trabajos de la Cosever, para lo cual se sugiere actualizar su integración y que las partes faculten una representación que permita la reanudación de los trabajos que por Ley le corresponden.

Llamamos al Gobierno Federal, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a la sociedad en su conjunto a que todos asumamos con responsabilidad los compromisos y las tareas que nos corresponden, de manera que la solución política del conflicto de Chiapas a partir de los pueblos indios contribuya al avance de la democracia en México.

Ciudad de México, 22 de enero de 1998

COMISIÓN NACIONAL DE INTERMEDIACIÓN
COMISIÓN DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN

¿p s e l c i g e r d o a s d a ?

Cuando los medios de comunicación anunciaron la matanza de Acteal, sólo dieron el número de muertos (45 personas entre mujeres, hombre y niños), días después se supo que los muertos estaban en una Ermita orando de rodillas y, además, que pertenecían a una Sociedad Civil denominada Las Abejas.

¿Quiénes son Las Abejas? Don Samuel Ruiz García, Obispo de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y Presidente de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) nos dice al respecto: "Este grupo de hermanos y hermanas, desplazados, pertenecen al grupo civil y pacifista llamado Las Abejas, agrupación que en búsqueda de una solución negociada y política, sin uso de la violencia, se formó desde 1992 y en fechas actuales apoyaba toda acción civil pacifista que ayudará a la solución de los conflictos del Estado".

Con la descripción del Obispo Samuel Ruiz, acerca de la Sociedad Civil Las Abejas, nos debe quedar claro que esta matanza no fue un hecho aislado o circunstancial,

no mataron a esto ciudadanos ejemplares por encontrarse hincados y orando en el lugar equivocado. El hecho de que pertenecieran a una sociedad civil que optó de manera abierta y pública por la no-violencia y la lucha civil pacífica en la búsqueda de una solución política para el conflicto de Chiapas. Los mismos fueron hostigados recientemente, hecho que los llevó a desplazarse de su lugar de origen. Por último, los asesinados se encontraban en la Ermita del lugar orando por la paz.

El mensaje que querían dar los asesinos con su acción, quedó claro para los que viven y trabajan en Chiapas por una paz con justicia y dignidad: la sociedad civil es peligrosa, mucho más cuando sus armas son la organización libre, la lucha no-violenta y la fuerza de la verdad y el amor. Por eso la matanza de Acteal no fue un hecho circunstancial, sino premeditado con la intención de amedrentar todo esfuerzo de la sociedad civil para alcanzar una paz justa para todos los chiapanecos, por medio de la no-violencia y la lucha civil pacífica.

■ Miguel
■ Ortega

5 condiciones para el diálogo

A finales de 1996 el EZLN decidió que no asistiría a las reuniones para el Diálogo por la Paz si antes no se cumplían cinco condiciones mínimas. Habían pasado siete meses de la firma de los Acuerdos de San Andrés y nada indicaba que se hiciera algo por hacerlos realidad. Los zapatistas y la parte de la sociedad civil que apoyó esta decisión, consideraron que el diálogo es más que discursos frente a un foro público: que la palabra empeñada, como resultado del diálogo, tiene que honrarse y convertirse en acciones. No existe diálogo verdadero sin la voluntad de cumplir lo que se acuerda.

Los cinco puntos que planteó el EZLN como condiciones mínimas para reanudar el diálogo son:

1. Desarme de los grupos paramilitares

y cese a las hostilidades en la Zona Norte del estado de Chiapas.

No sólo no se han detenido los grupos paramilitares en la Zona Norte, sino que se han extendido a otras regiones indígenas dentro y fuera del estado de Chiapas, particularmente en Los Altos, escenario de la matanza de Acteal.

2. Instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación (Coseve), organismo creado por la ley del Diálogo encargada de dar seguimiento a los compromisos pactados en el diálogo.

Formalmente se instaló la Coseve, sin embargo no ha contado con respaldo político para actuar. Después de dos reuniones de carácter administrativo, sin importancia para el proceso de pacificación, se han suspendido sus actividades.

3. Liberación de los presuntos zapatistas.

Se han liberado a la mayoría de ellos, sin embargo todavía existen algunos de ellos presos y con procesos legales en su contra.

4. Nombramiento de una delegación gubernamental con capacidad de decisión y dispuesta al diálogo.

A pesar del constante cambio de personas responsables de la delegación gubernamental, no se ha creado un clima de propicio al diálogo.

5. Reforma constitucional que reconociera los derechos de los pueblos indígenas, de acuerdo a lo pactado en San Andrés.

El gobierno rechazó la iniciativa de reforma elaborada por la Cocopa y rompiendo las reglas aprobadas, presentó una propia que fue rechazada por el EZLN.

en Chiapas

FRAGMENTOS

PUBLICADA EL 11 DE MARZO DE 1995 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Artículo 7°

El Gobierno Federal en coordinación con el Gobierno del Estado de Chiapas y los ayuntamientos respectivos, otorgará garantías y facilidades a los indígenas y campesinos de la zona del conflicto para su reintegración y asentamiento en sus comunidades de origen. Esta disposición es válida para todos los indígenas y campesinos, independientemente de su participación en el grupo involucrado en el conflicto del Estado de Chiapas.

Artículo 8°

Se creará la Comisión de Concordia y Pacificación. Esta estará integrada por los miembros de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas, así como por un representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo del Estado de Chiapas, que serán invitados con tal objeto.

Esta Comisión coordinará sus acciones con la instancia de mediación reconocida por los negociadores.

Artículo 9°

La Comisión para la Concordia y Pacificación se encargará de:

I.- Coadyuvar a fijar las bases para el diálogo y la negociación del acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere esta Ley, las que contendrán, entre otros aspectos los lugares y condiciones específicos de las negociaciones y la agenda de las mismas;

II.- Facilitar el diálogo y la negociación y apoyar la suscripción del acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere esta Ley;

III.- Promover ante las autoridades competentes condiciones para realizar el diálogo en los lugares específicos que hayan sido pactados para las negociaciones; y

IV.- Gestionar ante la Secretaría de Gobernación la adopción de las medidas necesarias para la adecuada difusión de esta Ley.

Artículo 10°

Una vez que se suscriba el acuerdo

de concordia y pacificación a que se refiere esta Ley, o cuando los negociadores lo consideren procedente, se creará una Comisión de Seguimiento y Verificación, integrada de manera paritaria, en los términos que lo acuerden los negociadores y a la que se invitará a sendos representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chiapas.

Artículo 11°

La Comisión de Seguimiento y Verificación se encargará de:

I.- Dar seguimiento a los compromisos pactados dentro del proceso de concordia y pacificación;

II.- Proponer reformas jurídicas que se deriven del acuerdo de concordia y pacificación previsto en esta Ley; y

III.- Publicar de manera periódica las acciones emprendidas y los resultados alcanzados, derivados del acuerdo para la concordia y pacificación, tendientes a resolver los problemas que dieron lugar al conflicto a que se refiere la presente Ley.

capa social mexicana que se siente acompañante de la lucha zapatista. "No están solos", fue el claro mensaje de la marcha.

Tercero. En el estado de Chiapas han aparecido "brotes" zapatistas en regiones que se suponían fuera de la "zona de conflicto", además, las vigorosas organizaciones sociales que habían firmado el Finiquito Agrario y recibido recursos financieros gubernamentales, en contra de la política zapatista, hoy colaboran en contra de la militarización del municipio de Ocosingo. Por último, los zapatistas han creado decenas de municipios autónomos (más de treinta, según la cuenta del ex Comisionado para la Paz, Pedro Joaquín Coldwell), con lo que ejercen su autonomía por la vía de los hechos.

En plena pugna por la sucesión presidencial del 2000, la clase política en el poder parece ensayar la "mano dura". Por ahora, un elemento que a pesar de no estar plenamente visible para los medios de comunicación, tiene un peso determinante en el conflicto chiapaneco: la prudencia de los pueblos indígenas frente a los ataques paramilitares y el hostigamiento militar. Si en Acteal sólo hubo víctimas de un solo bando se debe a que los indígenas, en vez de atacar a los secuestradores, se reunieron a rezar. Medir hasta dónde llega esta prudencia es hoy, colocar al país en el camino del desastre. (Eugenio Bermejillo)

de la iniciativa de la **Cocopa** y la CUADRO COMPARATIVO contrapropuesta del **ejecutivo**

A finales de 1996, ante el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) decidió aplazar las reuniones con la delegación gubernamental hasta que dichos acuerdos se cumplieran. Una de las cinco condiciones para regresar a la mesa de negociaciones, que sigue sin cumplirse, es la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas.

La delegación gubernamental y el EZLN acordaron que la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), un organismo plural formado por legisladores de todos los partidos políticos cuyo objetivo es coadyuvar en los Diálogos de Paz, presentara una iniciativa de reforma constitucional en materia indígena, estrictamente apegada a los Acuerdos de San Andrés. El 29 de noviembre la Cocopa presentó a las partes su propuesta. El

entendido era que nos se aceptarían modificaciones parciales, que se aceptaría o rechazaría en su conjunto. El EZLN aceptó. El gobierno la aceptó, pero luego dijo que necesitaba tiempo para "consultar especialistas".

El 20 de diciembre, el gobierno federal presentó una contrapropuesta de iniciativa de reforma. No se trataba de observaciones al proyecto presentado por la Cocopa, sino que modificaba cada una de las fracciones propuestas. Esto rompía el procedimiento acordado con el EZLN.

El EZLN, después de consultar a representantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y a sus asesores en el Diálogo de Paz, decidió rechazar la iniciativa gubernamental porque se había roto con el procedimiento acordado y porque calificó de inaceptable la iniciativa gubernamental ya que la "obsesión [del gobierno] por acotar derechos produjo un tex-

to muy confuso, sujeto a interpretaciones encontradas".

La propuesta de iniciativa de reforma constitucional que presentó el gobierno contiene diferencias importantes con respecto a la propuesta por la Cocopa, que limitan el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. La iniciativa del gobierno omite puntos básicos pactados en los Acuerdos de San Andrés e incluye "candados" que dejan a los pueblos indígenas sin la posibilidad de ejercer sus derechos.

El pronunciamiento conjunto que hicieron la Conai y la Cocopa el pasado 22 de enero señala que "la concreción de los Acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígena, es el punto central de la crisis en la que actualmente se encuentra el diálogo. De su cumplimiento depende fundamentalmente la reanudación de éste".

Iniciativa Cocopa 20 nov. 1996 Cursivas: eliminado o notificado por Gobierno	Observaciones del gobierno 20 dic. 1996 Negritas: agregado o modificado por el Gobierno
<p>La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquéllos que descienden de poblaciones que habitaban en el país al iniciarse la colonización y antes de que se establecieran las fronteras de los Estados Unidos Mexicanos, y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.</p> <p>Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y, como expresión de ésta, a la autonomía como parte del Estado mexicano, para:</p>	<p>La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas a los cuales, en los términos de esta Constitución, se les reconoce el derecho a la libre determinación que se expresa en un marco de autonomía respecto a sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. Dicho derecho les permitirá:</p>
<p>I. Decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural.</p>	

círculo perverso

El presidente Ernesto Zedillo declaró a los medios de comunicación que "un círculo perverso obstaculiza deliberada y sistemáticamente la presencia del gobierno federal, para luego culparlo tanto de la falta de atención a la población más necesitada como de omisión en tragedias como la de Acteal" (La Jornada, 11 de enero).

El 11 de enero publicó La Jornada, en primera plana, una foto en la que el secretario de Salud, José Ramón de la Fuente, atiende a una niña indígena con neumonía en Chenalhó. Ahí mismo, pero ya no captados por la cámara, se encuentran el gobernador, diputados federales, miembros de la CNDH, fotógrafos y reporteros.

El 22 de diciembre del año pasado, 46 niños, mujeres y hombres fueron masacrados mientras oraban por la paz en el paraje de Acteal. Los asesinos han sido identificados como integrantes de un grupo paramilitar.

Estos grupos han estado recibiendo apoyo financiero del gobierno estatal y federal. El caso más conocido es el del grupo paramilitar Paz, Justicia y Desarrollo, el cual, bajo su disfraz de asociación civil, recibió 4 millones 800 mil pesos el 4 de julio de 1997.

En septiembre de 1996 se suspendió el diálogo. El EZLN exigió el cumplimiento de 5 condiciones mínimas para restablecer el diálogo, entre ellas, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y que se pusiera fin a la violencia en la zona norte del estado.

Chiapas es una de las regiones con mayor riqueza en recursos naturales, pero sus habitantes están en la larga lista de los olvidados por los programas de salud, educación, servicios y todas las otras actividades que se dice son competencia del gobierno.

Fueron muchas las organizaciones en Chiapas que por medios pacíficos intentaron solucionar los problemas de tierra, salud, educación y justicia antes de la creación del EZLN. Si surge la vía armada es precisamente por el agotamiento de otros canales.

Chiapas aparece, por primera vez, en la agenda po-

lítica nacional en 1994, cuando el EZLN se levanta y le declara la guerra al gobierno y al ejército federal.

En marzo del mismo año, presionado por la sociedad civil y la opinión pública nacional e internacional, el gobierno se sienta a dialogar con los rebeldes.

Muchas han sido las tácticas que ha usado el gobierno desde entonces, pero a partir de 1995 está claro que la estrategia ha sido la simulación. Firmar acuerdos con los dedos cruzados debajo de la mesa (no vaya a ser que sí se cumplan), y mientras, como los muñecos que al voltearlos cambian de cara: 1) entrena a grupos paramilitares bajo la supervisión de elementos de seguridad y ejército estatal; 2) si bien es cierto que entre 1995 y 1997 se han canalizado 57 mil millones pesos a Chiapas, el dinero ha sido distribuido estratégicamente, muchas de las veces en forma de despenas, camionetas, láminas y hasta efectivo entre los simpatizantes del PRI y en forma de municiones, armas, camionetas y sueldos a los grupos paramilitares, también se han construido carreteras para que el ejército federal pueda transitar más libremente; 3) en enero de este año, el ejército federal y la Seguridad Pública incursiona en las comunidades zapatistas, destrozando alimentos e instrumentos de trabajo.

En los Acuerdos de San Andrés, firmados e incumplidos por el gobierno, se establece que se debe garantizar la participación de los pueblos indígenas en todas las fases de la acción pública. La ayuda gubernamental enviada a los desplazados es una muestra, entre tantas, de la incoherencia que hay entre la palabra y la acción del gobierno.

En palabras de un desplazado, "Nosotros no necesitamos el arroz que nos quieren mandar porque la persona no está en su casa. Ahorita no queremos nada. El apoyo que queremos es la paz y la justicia para todos los pueblos de Chenalhó."

Entonces, ¿cómo iba aquello del círculo perverso del que habla el señor presidente?

■ Tania
■ Carrasco

<p>ARTICULO 73 El Congreso tiene facultad I... XXVII XXVIII. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, respecto de los pueblos y comunidades indígenas, con el objeto de cumplir los fines previstos en los artículos 4o. y 115 de esta Constitución;</p>	<p>ARTICULO 73 El Congreso tiene facultad: I... XXVII XXVIII. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los municipios, con el objeto de lograr los fines previstos en los artículos 4o. y 115 de esta Constitución, en materia indígena;</p>
<p>ARTICULO 116 El poder público de los estados... I. II. El número de representantes... Los diputados de las legislaturas... En la legislación electoral... Para garantizar la representación de los pueblos indígenas en las legislaturas de los estados por el principio de mayoría relativa, los distritos electorales deberán ajustarse conforme a la distribución geográfica de dichos pueblos.</p>	<p>ARTICULO 116 El poder público de los estados... I... II. El número de representantes... Los diputados de las legislaturas... En la legislación electoral... Para garantizar la representación de los pueblos indígenas en las legislaturas de los Estados por el principio de mayoría relativa, en la conformación de los distritos electorales uninominales, se tomará en cuenta la distribución geográfica de dichos pueblos.</p>

Fuente: Asesores del EZLN para el Diálogo de San Andrés.

Diferencias *más* entre las **2** iniciativas importantes

1. Definición de Pueblos Indígenas. A diferencia de la iniciativa de la Cocopa, la del gobierno no define quiénes son los pueblos indígenas.

2. Sistemas Normativos. La Cocopa emplea la expresión sistemas normativos, que implica que los pueblos indígenas norman su vida por medio de un cuerpo coherente de leyes, así sean de orales. Este concepto es sustituido en la versión del gobierno por el de usos y costumbres, expresión no reconoce el carácter integral de las normas indígenas.

En su discurso del 23 de enero Ernesto Zedillo declaró que el gobierno federal está de acuerdo en reconocer los siste-

mas normativos internos de los pueblos indígenas.

3. Tierras y territorios. La iniciativa que presentó el gobierno no hace ninguna mención a lo que es la demanda más sentida por los indígenas y parte integral su derecho a la autonomía: las tierras y territorios.

4. Comunidad. La iniciativa de la Cocopa señala que la comunidad indígena es una entidad de derecho público, lo que la incluye como parte constitutiva de la República Mexicana. La propuesta del gobierno reduce el carácter de la comunidad a entidad de interés público, que le da un papel por debajo de su im-

portancia y abre las puertas a la injerencia gubernamental en los asuntos propios de las comunidades.

5. Municipio. Mientras que la iniciativa de los legisladores considera como indígenas por derecho a los municipios, comunidades y organismos auxiliares del ayuntamiento que asuman su pertenencia a un pueblo indígena, —lo que deja la responsabilidad de la decisión a la propia dinámica de los pueblos indígenas—; la del gobierno propone definir las por su carácter predominantemente indígena, sin indicar quién o quiénes serán los responsables de determinar esto, ni sobre qué bases deberán hacerlo.

<p>II. Aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, en particular, la dignidad e integridad de las mujeres; sus procedimientos, juicios y decisiones serán convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado;</p>	<p>I. Aplicar sus normas, usos y costumbres en la regulación y solución de conflictos internos entre sus miembros, respetando las garantías que establece esta Constitución y los derechos humanos, así como la dignidad e integridad de las mujeres. Las leyes locales preverán el reconocimiento a las instancias y procedimientos que utilicen para ello, y establecerán las normas para que sus juicios y resoluciones sean homologados por las autoridades jurisdiccionales del Estado;</p>
<p>III. Elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno interno de acuerdo a sus normas en los ámbitos de su autonomía, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad.</p>	<p>II. Elegir a sus autoridades municipales y ejercer sus formas de gobierno interno, siempre y cuando se garantice el respeto a los derechos políticos de todos los ciudadanos y la participación de las mujeres en condiciones de igualdad;</p>
<p>IV. Fortalecer su participación y representación políticas de acuerdo con sus especificidades culturales;</p>	<p>III. Fortalecer su participación y representación políticas de conformidad con sus especificidades culturales;</p>
<p>V. Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidas éstas como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponde a la Nación;</p>	<p>IV. Acceder al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras, respetando las formas, modalidades y limitaciones establecidas para la propiedad por esta Constitución y las leyes.</p>
<p>VI. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que configuran su cultura e identidad, y VII. Adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación.</p>	<p>V. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que configuren su cultura e identidad y VI. Adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación, conforme a la ley.</p>
<p>La Federación, los estados y los municipios deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, y con el concurso de los pueblos indígenas, promover su desarrollo equitativo y sustentable y la educación bilingüe e intercultural. Asimismo, deberán impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la Nación y combatir toda forma de discriminación. Las autoridades educativas federales, estatales y municipales, en consulta con los pueblos indígenas, definirán y desarrollarán programas educativos de contenido regional, en los que reconocerán su herencia cultural.</p>	<p>La Federación, los estados y los municipios deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, y con el concurso de los pueblos indígenas, promover el desarrollo equitativo y sustentable y la educación bilingüe e intercultural. Asimismo, deberán impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la Nación y combatir toda forma de discriminación. Las autoridades educativas competentes, tomando en cuenta la opinión de los pueblos indígenas, definirán y desarrollarán programas educativos de contenido regional en los que reconocerán su herencia cultural.</p>
<p>El Estado impulsará también programas específicos de protección de los derechos de los indígenas migrantes, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.</p>	<p>El Estado impulsará también programas específicos de protección de los derechos de los indígenas migrantes en el territorio nacional y, de acuerdo con las normas internacionales, en el extranjero.</p>
<p>Para garantizar el acceso pleno de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado, en todos los juicios y procedimientos que involucren individual y colectivamente a indígenas, se</p>	<p>Para garantizar el acceso pleno de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado, en todos los juicios y procedimientos que involucren individual o colectivamente a indígenas, se</p>

tomarán en cuenta sus prácticas jurídicas y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tendrán en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores, particulares o de oficio, que tengan conocimiento de sus lenguas y culturas.	tomarán en cuenta sus prácticas jurídicas y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tendrán en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de sus lenguas y culturas.
El Estado establecerá las instituciones y políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo integral, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con dichos pueblos.	El Estado establecerá las instituciones y políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo integral, las cuales deberán ser diseñadas y operadas concertadamente con dichos pueblos.
Las Constituciones y las leyes de los Estados de la República, conforme a sus particulares características, establecerán las modalidades pertinentes para la aplicación de los principios señalados, garantizando los derechos que esta Constitución reconoce a los pueblos indígenas. El varón y la mujer son iguales ante la ley...	Las Constituciones y las leyes de los Estados, conforme a sus particulares características, establecerán las modalidades pertinentes para la aplicación de los principios señalados, garantizando los derechos que esta Constitución reconoce a los pueblos indígenas. El varón y la mujer son iguales ante ley...
ARTICULO 115. Los Estados adoptarán... I. Cada municipio... II. Los municipios. III. Los municipios, con el concurso de los estados... IV. Los municipios administrarán libremente... V. Los municipios... En los planes de desarrollo municipal y en los programas que de ellos se deriven, los ayuntamientos le darán participación a los núcleos de población ubicados dentro de la circunscripción municipal, en los términos que establezca la legislación local. En cada municipio se establecerán mecanismos de participación ciudadana para coadyuvar con los ayuntamientos en la programación, ejercicio, evaluación y control de los recursos, incluidos los federales, que se destinen al desarrollo social. VI... VII... VIII...	ARTICULO 115. Los Estados adoptarán... I. Cada municipio... II. Los municipios... III. Los municipios, con el concurso de los estados... IV. Los municipios administrarán libremente... V. Los municipios... En los planes de desarrollo municipal y en los programas que de ellos se deriven, los ayuntamientos le darán participación a los núcleos de población ubicados dentro de la circunscripción municipal, en los términos que establezca la legislación estatal. Asimismo, las leyes locales establecerán mecanismos de participación ciudadana para coadyuvar con los ayuntamientos en la programación, ejercicio, evaluación y control de los recursos, incluidos los federales, que se destinen al desarrollo social. VI... VII... VIII...
IX. Se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa. Las comunidades indígenas como entidades de derecho público y los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena tendrán la facultad de asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones. Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen. Corresponderá a las Legislaturas estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades que pudieran transferírseles, y	IX. Se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que tengan valor su autonomía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. de esta Constitución. Las comunidades de los pueblos indígenas como entidades de interés público y los municipios con población mayoritariamente indígena, tendrán la facultad de asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones, respetando siempre la división político administrativa en cada entidad federativa. Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen. Corresponderá a las Legislaturas estatales determinar los recursos y , en su caso, las funciones y facultades que pudieran transferírseles, y

X. En los municipios, comunidades, organismos auxiliares del ayuntamiento e instancias afines que asuman su pertenencia a un pueblo indígena, se reconocerá a sus habitantes el derecho para que definan, de acuerdo con las prácticas políticas propias de la tradición de cada uno de ellos, los procedimientos para la elección de sus autoridades o representantes y para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, en un marco que asegure la unidad del Estado nacional. La legislación local establecerá las bases y modalidades para asegurar el ejercicio pleno de este derecho. Las Legislaturas de los Estados podrán proceder a la remunicipalización de los territorios en que estén asentados los pueblos indígenas, la cual deberá realizarse en consulta con las poblaciones involucradas.	X. En los municipios, comunidades, organismos auxiliares del ayuntamiento e instancias afines, de carácter predominantemente indígena y para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno , se reconocerá a sus habitantes el derecho para elegir a sus autoridades o representantes internos, de acuerdo con sus prácticas políticas tradicionales , en un marco que asegure la unidad del Estado nacional y el respeto a esta Constitución. La legislación local establecerá las bases y modalidades para asegurar el ejercicio pleno de este derecho. Las Constituciones y leyes locales establecerán los requisitos y procedimientos para constituir como municipios u órganos auxiliares de los mismos, a los pueblos indígenas o a sus comunidades, asentados dentro de los límites de cada Estado.
ARTICULO 18 Sólo por delito que merezca. Los gobiernos... Los gobernadores... La Federación... Los reos de nacionalidad... Los indígenas podrán compurgar sus penas preferentemente en los establecimientos más cercanos a su domicilio, de modo que se propicie su reintegración a la comunidad como mecanismo esencial de readaptación social.	ARTICULO 18 Sólo por delito que merezca... Los gobiernos... Los gobernadores... La Federación... Los reos de nacionalidad... Las leyes fijarán los casos en que la calidad indígena confiere el beneficio de compurgar las penas preferentemente en los establecimientos más cercanos a su domicilio, de modo que se propicie su reintegración a la comunidad como mecanismo esencial de readaptación social; asimismo determinarán los casos, en que por la gravedad del delito, no gozarán de este beneficio.
ARTICULO 26 El Estado organizará... Los fines del proyecto... La ley facultará... La legislación correspondiente establecerá los mecanismos necesarios para que en los planes y programas de desarrollo se tomen en cuenta a las comunidades y pueblos indígenas en sus necesidades y sus especificidades culturales. El Estado les garantizará su acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional.	ARTICULO 26 El Estado organizará... Los fines del proyecto... La ley facultará... La legislación correspondiente establecerá los mecanismos necesarios para que en los planes y programas de desarrollo se tomen en cuenta a los pueblos indígenas en sus necesidades y sus especificidades culturales. El Estado promoverá su acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional.
ARTICULO 53 La demarcación territorial... Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales y las circunscripciones electorales plurinominales, deberá tomarse en cuenta la ubicación de los pueblos indígenas, a fin de asegurar su participación y representación políticas en el ámbito nacional. Para la elección.	ARTICULO 53 La demarcación territorial... Para establecer la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales, deberá tomarse en cuenta la ubicación de los pueblos indígenas, a fin de asegurar su participación y representación políticas en el ámbito nacional. Para la elección.